



SRIO. IJC. EFRAIN ANGELES SERRIES.

AMPARO DIRECTO  
8186/961/2a.

ROMULO HERNANDEZ MARTINEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del día trece de junio de mil novecientos sesenta y tres.

Vo. Bo.

V I S T O el juicio de amparo directo número ocho mil ciento ochenta y seis de mil novecientos sesenta y uno, promovido por Rómulo Hernández Martínez contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y Juez Mixto de Primera Instancia de Papantla, Ver., que declaró violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, consistentes, respectivamente, en la sentencia definitiva dictada en el toca a la apelación del juicio civil seguido por el quejoso, a Guadalupe Kochigua; y en su ejecución, y

## R E S U L T A N D O:

Por escrito de fecha dos de diciembre de mil novecientos sesenta, ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Papantla, Ver., Rómulo Hernández Martínez promovió juicio civil contra Guadalupe Kochigua, demandando: a).- la declaración de que es propietario de la parcela número [REDACTED] del lote denominado [REDACTED], municipio de Papantla, Ver., b).-- La reivindicación, desocupación y entrega material del inmueble; c).- La entrega de las accesiones y mejoras de dicho predio; d).- El pago de frutos producidos por dicha parcela, desde que el demandado la ocupa ilegalmente; e).- El pago de [REDACTED] por concepto de daños y perjuicios causados al negarse el demandado a -

desocupar y entregar el predio; y f).- El pago de costas. Como hechos, el actor expresó: 1.- Es propietario de la parcela aludida, que tiene una extensión superficial de treinta y una hectáreas, diecisiete áreas y noventa y cinco metros cuadrados, como lo comprueba con la copia certificada deducida del juicio civil número 566/958, que contiene la resolución del mismo Juez, en el sentido de que es el dueño del predio, copia registrada debidamente e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 2.- Desde principios del año de mil novecientos cincuenta y nueve, Guadalupe Xochigua invadió su parcela y se ha negado a desocuparla a pesar de las gestiones que ha hecho en ese sentido, apoderándose de dos casas de techo de palma y madera, dedicando el terreno a siembra y disponiendo de las palmillas de su propiedad. 3.- El demandado es poseedor de mala fe, porque invadió la parcela sin título alguno, y a sabiendas de que él (el actor), es el propietario. 4.- Como valor de los perjuicios causados, con motivo de la falta de entrega del inmueble que ha impedido su explotación, y de la disposición de la palmilla, se fija la cantidad de [REDACTED]. Funda su demanda en los artículos 850, 867, 921, 922, 923, 930 y 936 del Código Civil.

Por escrito de seis de marzo de mil novecientos sesenta y uno Guadalupe Xochigua contestó la demanda y formuló reconvención. En cuanto a la primera, manifestó: 1.- No le es propio el hecho de que el actor haya promovido juicio contra Victoriana y Felipa Trinidad Pérez, a quienes se refirió la sentencia que se acompaña a la demanda, para justificar el derecho de propiedad, documento que es -



ilegal por haberse derivado de un procedimiento indebido ya que nunca tuvo la posesión material, y la manifestación que se hace en dicha demanda entraña la comisión de delitos que oportunamente deberán investigarse. 2.- No es cierto que desde principios de mil novecientos cincuenta y nueve, haya invadido ilegalmente la parcela número [REDACTED] que el actor indica que adquirió por prescripción positiva, atribuyéndole que se ha negado a desocuparla, apoderándose de dos casas y disponiendo del terreno en la forma que indica. La verdad es que desde hace más de treinta años, personalmente vive (el demandado) en la parcela, en la que comenzó a hacer vida marital con Nicasia Méndez Pérez, sirviéndose del predio para cultivarlo como dueño, donde construyó las dos casas que le reclama el actor, en las que nacieron sus hijos, conforme puede demostrarse con el testimonio de las personas que indica. Es falso que solo cultiva palmillos, ya que desde que está en posesión de la parcela ha sembrado maíz, frijol y vainilla, por lo que el actor no tiene en el predio ninguno clase de cultivo de los que se ostentan como propietario. 3.- No es poseedor de mala fe, ni ha invadido la parcela sin título, a sabiendas de que el actor es el propietario pues, como lo dice en el punto anterior, comenzó a vivir con Nicolasa Méndez Pérez en ese lugar en que estableció su domicilio, habiéndose considerado siempre como dueño, ejerciendo una posesión material, lo que nunca ha hecho Rómulo Hernández Martínez, quien siguió un juicio de prescripción positiva contra personas que habían fallecido con anterioridad a su escrito de demanda. 4.- No procede que desocupe y entregue la parcela, porque no se lo ha requerido para ello y esto no puede hacerlo Romy

lo Hernández Martínez, ya que aunque ahora presenta título, nunca ha estado en la parcela y mucho menos ha hecho cultivos y los que existen los hizo él (el demandado). No es cierto que el producto de la venta de palmillas le haya producido la cantidad de [REDACTED] se supone desde la fecha en que manifestó el actor que tomó posesión ilegalmente del predio, a principios de mil novecientos cincuenta y nueve, pues ni en todos los treinta años que lleva de vivir en la parcela se habría podido cobrar por ese concepto tal cantidad. La afirmación del actor significa que desconoce lo que produce la palmilla. En el capítulo de derecho, el demandado manifiesta que el actor no puede reclamar las prestaciones a que se refiere pues no tienen exacta aplicación los preceptos legales que invoca, por dos razones, una, porque aunque tiene título de propiedad, obtenido en un juicio seguido contra personas ya fallecidas, que no estaban en condiciones de defender sus derechos, en ese juicio no se llenaron las formalidades esenciales del procedimiento; y --- otra, porque teniendo él (el demandado) la posesión anterior al título de propiedad obtenido por el actor, basada en hechos falsos que pueden constituir delitos, en el caso tiene exacta aplicación la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obra en el apéndice al tomo XCVI del Semanario Judicial de la Federación que, en lo conducente dice: El título de propiedad para que la reivindicación sea procedente, necesita que sea anterior a la posesión lo que no sucede en la especie ya que tiene la posesión desde hace más de treinta años y el actor nunca la ha tenido. No se rebaten los vicios que tenga el título de propiedad, pues basta para que sea im





64

procedente la acción reivindicatoria y sus consecuencias, la antigüedad de la posesión del demandado. Por lo que concierne a la contrademanda, Guadalupe Kochigua la concreta en la forma que sigue: a).- La declaración de que por prescripción positiva, se ha convertido en propietario de la parcela número [REDACTED] del lote denominado [REDACTED] con la superficie y linderos que se indican en la sentencia que sirve de título de propiedad al actor; b).- que la sentencia que se dictó constituya el título de su propiedad, y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, cancelándose la inscripción que aparece a nombre de Rómulo Hernández-Martínez, y c).- El pago de costas. La reconvencción comprendió al Encargado del Registro Público de la Propiedad, como demandado, llamándolo a la cancelación del acta número setenta, Sección Primera, de folios de la 1089 a la 1092, Tomo IV, de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, a nombre de Rómulo Hernández-Martínez; y que no se inscriba ninguna operación con respecto a la parcela [REDACTED] aludida. Como hechos, asentó: 1.- Por la lectura de la sentencia cuya copia presenta el actor, se enteró de que este siguió juicio de prescripción positiva contra Victoria y Felipa Trinidad Pérez, manifestando falsamente que por haber poseído por el tiempo y condiciones que la ley señala, se había convertido en propietario de la parcela número [REDACTED]. 2.- De la misma sentencia se desprende que se inscribió como título de propiedad a favor de Rómulo Hernández-Martínez, en el Registro Público de la Propiedad. 3.- De los datos del jui

cio de que se deriva dicha sentencia, aparece que Rómulo Hernández Martínez afirmó que desde más de veinte años - anteriores a su escrito de demanda, había estado en posesión material de la parcela, con el fin de obtener el dominio por prescripción positiva y la cancelación del título de propiedad que amparaba a las señoras Victoriana y Felipa Trinidad Pérez, habiendo obtenido sentencia favorable porque siguió el juicio cuando dichas personas - habían fallecido y, como es natural, se siguió en rebeldía, además de que las demandadas no tenían la posesión material sino que él (el hoy quejoso) era el que la ejercía con el carácter de propietario, pacífica, continua y públicamente, así como con justo título, sin que - desde la fecha en que tomó la posesión haya sido molestado en forma alguna. Para justificar que ha estado en posesión con todas las características necesarias para adquirir por prescripción positiva, con justo título, de buena fe, pacífica y continua, y por más de veinte años - anteriores a la fecha (6 de marzo de 1961), presenta los títulos de propiedad que amparaban los derechos de Victoriana y Felipa Trinidad Pérez, con quienes ya hace mucho tiempo celebró una operación de compraventa, como lo justifica con la posesión de los referidos títulos, para demostrar el justo título. Esto significa que se ha convertido en propietario de la parcela ciento cincuenta y cuatro de la que Rómulo Hernández Martínez se ostenta como dueño, manifestando que la adquirió por prescripción positiva, sin que nunca haya estado en posesión ni hecho - cultivos, sino que fundado en falsedades obtuvo una sentencia para tratar de apoderarse de un inmueble que no -



le pertenece, aunque su título esté inscrito a su nombre. Por ello tiene que demandarle la prescripción positiva, ya que aparece inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el carácter de dueño del inmueble. Por la misma razón, como se trata de una acción contradictoria sobre dominio, que es la que ejerce a su contrademanda, conjuntamente hace valer la cancelación de la inscripción en el Registro Público a nombre del actor. 4.- Siendo procedentes y legítimos los derechos que reclama, demanda también al Encargado del Registro Público de la Propiedad, la cancelación de la inscripción relativa a la sentencia que le sirve de título al actor. 5.- La cancelación del título falso que ampara su derecho Rómulo Hernández Martínez es procedente, y como teme que el actor trate de enajenar o ceder sus derechos en relación con la parcela número ciento cincuenta y cuatro, solicita que se ordene al Encargado del Registro Público de la Propiedad, se abstenga de hacer cualquier inscripción con relación a dicho predio, por estar en litigio el derecho de propiedad. Como fundamento de su reconvención Guadalupe Kochigua invocó los artículos 834, 842, 843, 844, 859, 863, 865, 1168, 1169, 1171, 1172, 1177, 1182, 1184, 1185, 1189, 1190, 2939 y 2941 del Código Civil, indicando que dichos preceptos la apoyan, pues desde hace más de treinta años está en posesión de la parcela con el carácter de dueño, con justo título no discutido, de buena fe, pacífica, continua y públicamente.

Por escrito de veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y uno, Rómulo Hernández Martínez, contestó la contrademanda, negándola en sus términos. Al efecto -

expuso: 1.- No es verdad que promovió un juicio simulado y que se haya fundado en hechos falsos. 2.- El número del acta de inscripción de la sentencia cuya copia sirve de título de propiedad, no es la número setenta, sino la número de cientos setenta. 3.- Es cierto que tiene inscrita a su nombre la parcela [REDACTED] con la salvedad a que se refiere el punto anterior. 4.-Igualmente, se refiere a esa salvedad. 5.- No tiene un título falso, sino que es el verdadero propietario de la citada parcela, la cual ha venido poseyendo y cultivando desde hace varios años. Ahora trata de arrebatársela el reconvencionista, acompañando títulos que no vienen al caso, - pues su registro fue cancelado y se hizo una nueva inscripción en el Registro Público de la Propiedad a favor del actor, mediante los requisitos que señala la ley. En el capítulo de derecho, el actor alegó que Guadalupe Xochigua carece de derecho para promover la reconvención, - no siendo aplicables en su favor los preceptos legales - en que la funda.

LEGENDO.- El Juez del conocimiento, con fecha veintidós de julio de mil novecientos sesenta y uno, dictó - sentencia con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- El actor en el principal señor Rómulo Hernández -- Martínez no justificó las acciones que ejercitó y el demandado señor Guadalupe Xochigua sí acreditó sus excepciones, -consecuentemente; SEGUNDO.- Se absuelve al señor Guadalupe Xochigua de todas y cada una de las acciones - que en el principal ejercitó en su contra el señor Rómulo Hernández Martínez.- TERCERO.- El actor en reconvención señor Guadalupe Xochigua justificó las acciones --



66

que ejercitó y el demandado señor Rómulo Hernández Martí  
"nez no acreditó sus excepciones, en consecuencia; CUARTO.  
"Se declara que por haber poseído por el tiempo y las --  
"condiciones exigidas por la Ley se operó la prescripción  
"positiva a favor del señor Guadalupe Kochigua, convirtiéndose  
"dóse en propietario de la parcela número [REDACTED]  
"[REDACTED] del lote denominado [REDACTED] de --  
"este Municipio con las medidas y colindancias que se es  
"pecificaron en el considerando segundo de esta resolución.  
"QUINTO.- Asimismo, y al no haberse excepcionado el ciuda  
"dano Encargado del Registro Público de la Propiedad de  
"esta Zona Fiscal, se decreta la cancelación del acta de  
"inscripción número doscientos setenta del Tomo número --  
"Cuatro de la Sección Primera, a fojas de la mil ochenta  
"y nueve a la mil noventa y dos, de veinticinco de marzo  
"de mil novecientos cincuenta y nueve existente en el Re  
"gistro Público de la Propiedad de esta Zona Fiscal, pa  
"ra lo cual gírese el oficio correspondiente. SEXTO.- Ex  
"pidase al Sr. Guadalupe Kochigua, copia certificada de  
"esta resolución para que le sirva de título supletorio  
"de dicho lote y una vez que pague los impuestos correspon  
"dientes la inscriba en el Registro Público de la Propie  
"dad. SEPTIMO.- Se condena al señor Rómulo Hernández Mar  
"tínez al pago de los gastos y costas originados en esta  
"instancia y que se justifiquen legalmente".

Inconforme el actor con ese fallo, interpuso apela  
ción y, sustentado el recurso, la tercera Sala del Tri  
bunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el día  
once de septiembre de mil novecientos sesenta y uno dic  
tó resolución que confirmó la del primer grado, condenando

al recurrente, al pago de las costas de la segunda instancia. Es la que constituye el acto reclamado.

TERCERO.- La demanda de amparo, interpuesta en tiempo, se admitió el día veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. La autoridad responsable rindió su informe justificado. El Ministerio Público se abstuvo de intervenir por carecer el asunto de interés público. El negocio fue turnado al Ministro relator por auto de catorce de febrero de mil novecientos sesenta y dos. En escrito del licenciado Julio R. Luengas, autorizado por el quejoso, recibido en dieciocho de mayo del mismo año (1962), se pidió que se dictara la resolución pendiente, y el acuerdo que le recayó, de ocho de junio siguiente, quedó notificado el día doce del propio mes y año.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- La existencia del acto reclamado se encuentra acreditada por medio del informe justificado de la autoridad responsable, y la sentencia que obra en este expediente, relacionada con los autos de primera instancia, que remitió.

SEGUNDO.- Los conceptos de violación que expresa el quejoso, en concreto, son los siguientes:

I.- Conforme al artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles, el tribunal de segunda instancia citará a las partes a una audiencia, en la que se oirá el alegato de ellas. En el caso, se ejercitó el derecho de alegar y correlativamente la responsable estuvo en la obligación de considerar los alegatos y comentarlos al engrosar la resolución. No habiendo cumplido con ello se privó al apelante de su derecho de defensa, violándose en -



17

su perjuicio las normas reguladoras del procedimiento.

II.- Se demandó: a).- La declaración de que el título de dominio del actor, es mejor para los efectos de la posesión que cualquiera otro que pudiera ostentar el demandado; b).- La desocupación, devolución y entrega del inmueble; y c).- El pago de accesorios legales. Esas acciones se fundaron en la resolución judicial que se dictó en el juicio 583/958, en la que se declaró al actor - propietario del inmueble, por haberse probado plenamente el hecho de que lo poseyó materialmente, a título de dueño, pacífica, pública y continuamente y de buena fe, durante más de veinte años. Copia de esa resolución se inscribió en el Registro Público de la Propiedad. Guadalupe Xochigua negó la demanda y reconvino (la prescripción positiva) y este significa que reconoció que el actor es dueño legítimo del inmueble. Obsérvese que no reclamó la nulidad del título base de la acción. Fijada así la litis, resulta violado el artículo 57 del Código Procesal Civil porque las responsables declararon que el citado título es nulo, declaración de la que parten los errores de las sentencias de ambas instancias. Si Guadalupe Xochigua no reclamó en vía de acción o de excepción esa nulidad las responsables no podían ocuparse de ese punto, habiendo alterado la litis pues no era cuestión planteada en el juicio. Igualmente aparece que la declaración de nulidad la hicieron en los considerandos de sus respectivas sentencias, y no en los puntos decisorios de ellas, lo cual es absurdo, contradictorio y fuera de la técnica. Así pues, el título de dominio, no declarado nulo en los resolutivos, sigue surtiendo sus efectos legales, prote-

giendo al actor en sus intereses, por lo que le da el derecho de recuperar la posesión, atendiéndose a que el demandado no tiene mejor título para poseer. (Se transcribe el texto de los artículos 839 y 842 del Código Civil y 14 del Código de Procedimientos Civiles). El demandado reconoció expresamente la legitimidad del derecho de propiedad del actor, sobre el inmueble disputado, y por eso lo reconvino la prescripción positiva. Pero después dice que no es dueño, en consecuencia ha deducido acciones y defensas contradictorias con violación del artículo 4o., del Código Procesal Civil. En este mismo yerro incidieron el Juez y la responsable, pues por una parte, afirman -- que el título del actor es de eficacia jurídica, que no es dueño, y por otra, declaran procedente la reconvencción, la cual no puede prosperar si no se reconoce previamente que es legítimo propietario del inmueble. Las constancias de autos se tomarán como pruebas aun cuando no se ofrezcan; y se tendrá por confeso al articulante -- respecto a los hechos propios que afirme en las posiciones (artículos 239 y 259 del Código de Procedimientos Civiles). Se articularon posiciones a Guadalupe Xochiguan que dicen: "2.- que está invadiendo parte de esa parcela" y "6.- que constantemente el señor Rómulo Hernández -- lo ha estado requiriendo extrajudicialmente para que se "salga de esa parcela". Contestó a ambas que sí. Esta -- confesión del demandado no se ha objetado y hace prueba plena. El demandado pidió que se considerara y valorizara en todas sus consecuencias, pero la responsable se negó a ello. Si esa confesión se aprecia de modo literal, -- se obtiene lo siguiente: 1.- el actor constantemente ha-





requerido a Xochigua para que desocupe y le devuelva la parcela; 2.- Los requerimientos se los hizo en su calidad de propietario del inmueble y con título de dominio inscrito en el Registro Público; 3.- El demandado no pudo poseer el predio de buena fe, ni con título, ni de manera pacífica; 4.- Por tanto, no se han cumplido los requisitos para que se sea favorecido por una prescripción positiva; 5.- Guadalupe Xochigua solo ha tenido la posesión material de una parte de la parcela disputada. El demandado, al articular posiciones al actor, manifestó: "Posición 1ª. Dirá si es cierto o no lo es que esta orden la dió porque se considera -- "dueño de la parcela". Respondió que sí es cierto. "Posición adicional segunda.- Que diga que desde qué fecha tiene abiertos los potreros en la parcela número [REDACTED]. Respondió que desde hace más de diez años. Estas posiciones que articuló Xochigua contienen hechos que prueban plenamente en su contra, y de ellos se deduce lo siguiente: 1.- Reconoce que el actor es dueño de la parcela; 2.- Que porque es dueño, el articulante suplen había dado órdenes para suspender los trabajos que ahí se estaban realizando; 3.- Que como legítimo dueño, el actor, una parte, la dedicó a potreros; 4.- que esos potreros los abrió, dentro de la parcela disputada, con derecho propio; 5.- que los puso en explotación desde hace más de diez años. Esto es claro para demostrar, por voz del demandado, el pleno y legítimo derecho de propiedad, del actor. Además exhibió un título de propiedad ya mencionado, inscrito en el Registro Público. En cambio Xochigua no exhibió ningún

título que justifique su derecho para poseer. Sin embargo, se falló en contra del actor y eso entraña una indebida apreciación de constancias que deben ser tenidas en cuenta aun cuando no se ofrezcan por las partes. La responsable violó las reglas que regulan el valor de la prueba confesional. Debe mencionarse que al articularse posiciones a Xochigua, se presentó el pliego en que se contenían. El demandado las absolvió. No obstante, puede notarse que no corre en autos ese pliego, lo que significa parcialidad del juez, al grado de mutilar las constancias del juicio. La responsable declaró que el actor probó su derecho de propiedad pero inmediatamente después dice que su título de dominio es nulo porque el juicio lo promovió en contra de personas que ya habían fallecido y, además, porque tiene establecido su domicilio fuera de la parcela disputada. Lo cierto es que demandó a Victoriana y Felipa-Trinidad Pérez, y que en la fecha de la demanda, vivían. El fallecimiento de ellas no se ha acreditado legalmente; el demandado confesó que lo ha estado requiriendo para que desocupe la parcela. Nunca se apersonó en el juicio aludido ni contradijo los derechos deducidos en él, de posesión y de propiedad. El derecho para poseer y el hecho de la posesión son elementos distintos; por eso una persona puede adquirir un predio a título de prescripción positiva, sin necesidad de que tenga establecido su domicilio en el mismo terreno. En este negocio debe aplicarse la jurisprudencia número dieciocho, que coincide con el espíritu y letra de las disposiciones legales que se refieren al ejerce-



69

cio de las acciones posesoria y reivindicatoria. De-  
be tenerse presente que el actor ejerció una acción -  
posesoria en los términos del artículo 839 del Código-  
Civil; en consecuencia, solo estaba obligado a demos-  
trar, para que se le restituyeran la posesión, que tie-  
ne mejor título para poseer, que el que ostenta o pueda  
ostentar el demandado. Estos extremos los demostró --  
con el título de dominio registrado. El demandado no-  
presentó ninguno. La responsable, entiendo que ejerció  
una acción reivindicatoria que tiene diferencias --  
fundamentales con la posesoria, que procede cuando el-  
demandado carece de título. La acción reivindicatoria  
procede solo en el caso en que el demandado ostente --  
un título para poseer. Por esto, típicamente en la ac-  
ción reivindicatoria siempre se deduce la acción de --  
nulidad del título que ostenta o puede ostentar el de-  
mandado. En esta especie éste confesó que no tienen tí-  
tulo para poseer; en consecuencia, se dedujo contra --  
de él la acción posesoria y la demanda en ese sentido  
es total y perfecta. A pesar de todo la responsable -  
aprovechó la jurisprudencia número diecinueve, afirmando  
que el actor debió presentar títulos de propiedad an-  
teriores a la posesión que aduce Kochiguo. El argumen-  
to carece de validez por las razones siguientes: a).-  
No es verdad que el demandado haya probado que su po-  
sesión es anterior al título de propiedad del actor. -  
El título consiste en una sentencia en que se declara-  
que desde hace más de veinte años tuvo la posesión ma-  
terial de la parcela. Constituye la verdad legal y --  
estando inscrita en el Registro Público surte efectos.

contra terceros; b).- Si el título de dominio quedó formado el año de mil novecientos cincuenta y nueve, eso significa que sus derechos de posesión material sobre el inmueble se ejercitaron continuamente desde antes de mil novecientos veintinueve; c).- El título de dominio procede de un juicio contradictorio en -- que dedujo derechos en contra de las primitivas dueñas, Victoria y Felipa Trinidad Pérez. Tiene que entenderse entonces, que su posesión implica una continuidad de la justa posesión que sus causantes ejercieron; d).- Si Xochigua reconoce que las demandadas eran legítimas poseedoras del inmueble, tiene -- que admitirse que la posesión del actor, como causahabiente de las primitivas dueñas, es legítima; e).- (En este punto se concreta el quejoso a transcribir el texto del artículo 1182 del Código Civil); f). Lo fundamental es que Guadalupe Xochigua no ostenta de ningún título que justifique su posesión; g).- Suponiéndose que por título tenga que entenderse solamente una cuestión de ánimo, de intención, tendrá -- que admitirse que no se ha probado ese valor subjetivo; h).- Es verdad que algunos testigos declararon -- que el demandado tiene la posesión desde hace algúntiempo, pero también es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que la posesión a título de dueño, por tener un valor -- subjetivo, no es susceptible de probarse por medio de testigos o de inspección judicial; i).- La formación de documentos escritos que sirvan para justificar la posesión y la necesidad de inscribirlos en



70

el Registro Público obedece a la idea del legislador - de que se exteriorice la prueba de la posesión. Por - ello el artículo 2957 del Código Civil, exige que quien ejerza una posesión con ánimo de convertirse en propietario, deba, mediante resolución judicial, inscribirla para que pueda surtir efectos en contra de terceros; - y j).- Guadalupe Xochigua no promovió diligencias de posesión ni la inscribió en el Registro Público de la Propiedad. Por tanto, carece de derecho para oponer una supuesta posesión que dice haber con ánimo de -- dueño, pues el artículo 2936 del Código Civil determina que los documentos que deban registrarse y no se -- registran, solo producen efectos entre quienes los -- otorgan, pero no podrán perjudicar a tercero quien sí podrá aprovecharlos en cuanto lo favorezcan.

III.- Indebidamente, la responsable condenó al pago de costas. Al concederse el amparo, tendrá que -- dictarse nueva resolución en la que se declaren procedentes las excepciones que ejerció el actor y que el responsable de las costas es Guadalupe Xochigua.

IV.- Las consideraciones que sirven de base a la sentencia reclamada, en concreto, son las siguientes: El primer agravio es improcedente pues además -- de que no se precisan los preceptos legales que se estiman violados, no puede aceptarse que el Juez suple la deficiencia de la parte apelada, pues aunque en la reconvencción se solicitó la cancelación del acta de -- inscripción número setenta y no la doscientos setenta, que es por la cual se decreta la cancelación, los datos que proporciona el reconvenccionista evidencian un

simple error de número, ya que su petición coincide con el testimonio presentado como prueba por la actora, por lo que el proceder del a quo no es oficioso. El segundo agravio es improcedente. Aunque se acepta que el recurrente hubiera presentado el pliego conteniendo las posiciones que debería absolver su contraparte, y ofrecido oportunamente las pruebas que -- indica, se advierte que, según consta a fojas sesenta y ocho, al terminar la audiencia, el Juez determinó que por haberse recibido todas las pruebas, era de concederse término a las partes para alegar, esto es, se declaró cerrado el período probatorio, sin que el apelante hubiera recurrido tal determinación, y por auto de ocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, se citó para sentencia, sin que tampoco se hubiera combatido ese proveído, no obstante haberse notificado, y es inconcuso que precluyó el derecho que pudo corresponderle, para hacerlo valer en apelación, en la que de conformidad con el artículo 522 del Código de Procedimientos Civiles, tuvo oportunidad de -- ofrecer las pruebas que dice le fueron desechadas, -- sin que lo hubiera hecho. El tercer agravio es improcedente. No es exacta la indebida apreciación de las pruebas, pues consta que el Juez les concede el valor que legalmente les corresponde; así, aunque toma en cuenta la contestación que el ahora apelante dio a algunas de las posiciones que le fueron formuladas, -- sin hacer alusión a aquellas con las cuales pretende destruir el resultado de esa prueba, eso se debe a -- que hace una relación de todos los elementos proba--



torios para concluir que su conjunto produce la convicción de que el reconvenido si probó la acción que ejercitó, toda vez que si, como lo afirma el apelante, la inspección ocular no es apta para probar el hecho de la posesión, ello es así cuando es la única prueba que se aporta, mas no cuando corroborara el resultado de otras. Independientemente de que sea verdad que los elementos, que la doctrina y jurisprudencia, han señalado como constitutivos de la acción reivindicatoria, la propiedad de la cosa, la posesión de esa misma cosa por parte del demandado, no puede desconocerse la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que cuando el demandado acredita tener la posesión desde fecha anterior a la del título exhibido por el actor, es no necesario que éste presente otro título anterior a esa posesión, por lo que en la especie, aunque hay presentado su título con el cual pretende justificar su derecho de propiedad, encontrándose acreditado que el demandado posee el inmueble de que se trata, con anterioridad a la fecha de dicho título, es claro que el Juez obró correctamente al estimar que debió presentarse un título anterior a esa posesión. Cabe hacer notar, a mayor abundamiento, que el título presentado por el actor proviene de un juicio de prescripción positiva, el que se promovió en contra de dos personas que era la fecha en que se inició, ya habían muerto, según confesión del propio actor, que hace plena en su contra, según lo previene el artículo 316 del Código Procesal Civil; no puede pasarse inadverti-

de la disposición del artículo 2941, párrafo primero, del Código Civil, con la que cumplió el reconvenido al pedir la cancelación de la inscripción del título exhibido por el actor, quien incurre en inexactitud al afirmar que el Juez sostiene que no tiene título, - pues el fundamento es que siendo la posesión del demandado, anterior a la fecha del título exhibido, era necesario que el actor presentara un título anterior a - aquella posesión, sin que ese razonamiento sea erróneo, por no haberse tomado en cuenta su confesión, en que - negó que el demandado hubiera poseído antes del título, pues no basta la simple afirmación sino que es indispensable que se demuestre, y la única prueba con la - que pretende adimnicular su afirmación fue la testimonial, pero ésta se valorizó correctamente por el inferior, de conformidad con el arbitrio que para ello le concede el artículo 332 del Código de Procedimientos - Civiles, y es de explorado derecho que el tribunal declarando no puede rebasar tal arbitrio pues es el Juez - el que está en mejor condición para ejercerlo por recibiría en forma directa y puede apreciar su veracidad - por las modulaciones de la voz de los testigos, sus - reacciones, la soltura o titubeos que revelen al deponer, etc.; o menos que su apreciación infrinja las reglas de la lógica o de la sana crítica, lo que en la especie no sucede. Los razonamientos que se contienen en la primera parte del cuarto agravio deben desestimarse, porque en ellos se insiste en la indebida valorización de las pruebas de inspección ocular y testimonial, punto que ha sido tratado. Por lo que atañe a -





72

que se haya estimado que el reconvenccionista acreditó los elementos de su acción, debe considerarse, que de todas las pruebas del actor y de las presunciones que de ellas se desprendan, se coliga que la conclusión es fundada. En estas condiciones, la sentencia apelada se ajusta a derecho, y debe confirmarse en sus términos. Atendiendo a que el apelante no obtiene resolución favorable, al tenor del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles, debe ordenársele al pago de las costas causadas en la segunda instancia.

CUARTO.- Es infundado el primer concepto de violación. Aunque es verdad que el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles, dispone que en la audiencia de la apelación se oirá el alegato de las partes, no le obliga al tribunal de segunda instancia tenga forzosamente que ocuparse del contenido de los alegatos, ni dictar la sentencia que resuelve el recurso, la que debe ajustarse a los términos del artículo 521 de dicho Código en cuanto ha de ser clara, precisa y congruente con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La consideración de los alegatos, no queda incluida en la materia de la resolución que se reclama, la cual solo se constituye con la expresión del motivo de la inconformidad, de los puntos que deben ser objeto de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irroga la resolución recurrida. Esto debe plantearse, al incorporarse la apela-

ción, conforme al artículo 514 del Código Procesal y no puede alterarse durante el trámite del recurso, por lo que si los alegatos se exponen ulteriormente a la expresión de los agravios, no pueden ser materia de estimación del tribunal de segundo grado, ya que con ellos solo se da a las partes la oportunidad de aducir lo que a su interés conviene, pero en relación con los puntos que constituyen el objeto de la apelación. Por lo demás, el quejoso no menciona qué razones, contenidas en el alegato a que se refiere, dejó de considerar la responsable, por lo cual menos aún, puede atenderse a su inconformidad.

QUINTO.- Es infundado el segundo concepto de violación. Resulta inexacto que el hoy quejoso haya demandado "la declaración de que el título de dominio del actor, es mejor para los efectos de la posesión -- que cualquier otro que pudiera ostentar el demandado". Expresamente su demanda se refirió a la acción reivindicatoria, que compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto -- es que se declare que el actor tiene el dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y -- accesorios. Rómulo Hernández Martínez se fundó en un título de propiedad a su favor, consistente en la copia certificada de la sentencia de fecha veintiocho -- de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Papantla, Ver., en el juicio que promovió contra Victoria y Felipe Trinidad Pérez, sobre prescripción positiva, respecto de la parcela número [REDACTED] del-



lote denominado [REDACTED], inscrita con el número 270, Sección Primera, Tomo Cuarto, el veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, en el Registro Público de la Propiedad. No es cierto que, como lo dice el quejoso, haya ejercitado la acción posesoria a que se refiere el artículo 14 del Código Civil, puesto que no se ostentó como poseedor, -- sino como propietario del inmueble, atribuyéndole su posesión a Guadalupe Xochigua. No se trata por consiguiente de una acción deducida en juicio a la que indebidamente se le haya considerado como reivindicatoria. El quejoso señala que en la sentencia reclamada se estimó que el título de la acción es nulo y que esto no lo reclamó el demandado, indicando con ello que la respuesta violó el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles. El hecho de que haya aplicado, sin mencionarlo, la jurisprudencia -- publicada con el número veintiuno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos cincuenta y cinco, en el sentido de que el título del demandante debe ser anterior a la posesión del demandado, y de que cuando la posesión de éste es anterior a ese título, entonces es necesario que el actor presente otro anterior a la posesión de que disfrutaba el demandado, no implica una declaración de nulidad -- del título de propiedad exhibido por Rómulo Hernández-Martínez. Aunque el quejoso afirma que la declaración de nulidad la hicieron el Juez y la responsable en los considerandos de sus respectivas sentencias, y no en los puntos decisorios, por lo que ello es absurdo, --

contradictorio y fuera de la técnica, en ese supuesto, la sentencia reclamada, que confirmó la de primera instancia, no le causaría agravio como razón para cederle el amparo. Si el demandado reconvenía al actor la prescripción positiva, eso se debió a que se ostentó como propietario del inmueble con apoyo en un título de dominio inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y el hecho de que lo haya reconocido ese carácter, en nada afectaba su reconvenición en virtud de la prescripción con el efecto de que se cancelara la inscripción existente en favor del actor. Por otro lado, la circunstancia de que haya negado la acción reivindicatoria, no significa que desconoció el carácter de dueño con el que promovió Rómulo Hernández Martínez, no derivándose, por tanto, que, como lo dice el quejoso, dedujo acciones y defensas contradictorias con infracción del artículo 4o., del Código de Procedimientos Civiles. El hecho de que el demandado haya contestado afirmativamente a las posiciones 2a. y 6a. que se le formularon, en el sentido de "que está invadiendo parte de esa parcela" y "que constantemente el señor Rómulo Hernández lo ha estado requiriendo extrajudicialmente para que se salga de esa parcela", es inconducente a la realización del interés del actor de obtener la reivindicación del predio, si resulta demostrado, por medio de la prueba de testigos ( [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] ), -- que Guadalupe Xochigua, ha tenido la posesión del inmueble por más de veinte años, con anterioridad a la-



fecha de sus declaraciones (once de mayo de mil novecientos sesenta y uno), es decir, que su posesión es anterior a la fecha en que Rómulo Hernández Martínez obtuvo su título de propiedad (veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve), por lo que la acción reivindicatoria no podía tenerse por acreditada, en aplicación de la jurisprudencia que se deja citada. Aunque Guadalupe Xochigua no ha exhibido ningún título que justifique su derecho de poseer, esto no obsta para considerarlo como poseedor, en relación con la acción reivindicatoria ejercitada para cuya procedencia, en su caso, no debe atenderse a que la posesión del demandado sea justificada. El quejoso sostiene que al articularse posiciones a Guadalupe Xochigua, se presentó el pliego en que se contenían; que las absolvió y que, no obstante, es de notarse que no corre en autos ese pliego, lo que da idea de la parcialidad del Juez. Esta afirmación, que sería inconducente, pues Rómulo Hernández Martínez no indica la consecuencia que en su perjuicio produciría ese hecho, aparece inexacta pues en el juicio consta el acta relativa a la absolución de posiciones a que se sometió el demandado y, a fojas cuarenta y siete de los autos, el pliego en que se contienen. A pesar de que es cierto que la responsable alude a que el actor promovió juicio (el de prescripción positiva) en contra de personas que ya habían fallecido, lo cual es verdad pues lo reconoció Rómulo Hernández Martínez al absolver la posición décima correspondiente a la acción reivindicatoria, y la posición quinta relativa a

la rescisión, es inexacto que haya declarado nulo el título de propiedad del actor, puesto que desestimó esa acción fundamentalmente por estar probado que el demandado tiene una posesión anterior al título citado, de manera que esa referencia era intrascendente, así como la que hizo también en el sentido de que Rómulo Hernández Martínez tenía establecido su domicilio fuera de la parcela objeto de la acción mencionada. El quejoso indica que en este caso es aplicable la jurisprudencia publicada con el número dieciocho - (debe decir veinte); esta jurisprudencia es genérica en cuanto determina los elementos de la acción reivindicatoria, exigibles para su procedencia, y que son, por un lado, la propiedad de la cosa que se reclama, y por otro, la posesión o tenencia por el demandado, de la cosa perseguida; y no es aplicable a virtud de que, como se ha asentado, la que corresponde es la número veintiuno, que es específica por cuanto se refiere al caso de que no obstante integrarse la acción en los elementos que se indican, no puede tenerse por acreditada, si el demandado tiene una posesión anterior al título de dominio del actor. Carece de toda razón el quejoso en lo que se centra a que la acción posesoria que dice ejercitó, proceda cuando el demandado no tiene título, y que la acción reivindicatoria proceda solo en el caso de que el demandado ostente un título para poseer. La acción denominada posesoria en el Código Civil de Veracruz, y conocida desde el Derecho Romano como publiciana, compete al poseedor civil de una cosa, contra el que la posee sin tí-



25

tulo a contrario, para tener en derecho, para que le sea restituida. Esta acción se ejercita pues por el poseedor (no propietario) contra otro poseedor y su finalidad es que se establezca quién de los dos poseedores tiene mejor derecho para poseer. La acción que ejerció Rómulo Hernández Martínez, no se encuentra en ese caso, puesto que se ostentó como propietario, fundándose en un título de dominio como es la sentencia que obtuvo en un juicio de prescripción positiva, y esto es independiente de que el demandado tuviera o no título para poseer. No es admisible que la consideración de la responsable sea incorrecta por que, como lo dice el quejoso, su título de propiedad se fundó en una posesión anterior que ejerció sobre el inmueble. La jurisprudencia, al referirse a que no procede la acción reivindicatoria cuando la posesión del demandado es anterior al título de dominio, no excluye el caso de que el título proceda o se derive de una posesión, como sucede si se obtiene a través de un juicio de prescripción positiva ya que el dominio se adquiere al consumarse la prescripción. Aunque el demandado no haya exhibido título que justifique su posesión frente al reivindicante, esto no era necesario pues su posesión justificada o no justificada, podía oponerla al actor si era anterior al título de este último. Debe señalarse que el quejoso no hace valer la falta de título del demandado en cuanto a su reconvención, por lo que en relación con la extincción de la contrademanda por prescripción positiva no puede considerarse que se formula un pun

to sobre el particular en el concepto de violación -- que se estudia. Por último, el hecho de que Guadalupe Xochigua no haya inscrito su posesión en el Registro Público de la Federación como prevé el artículo -- 2957 del Código Civil, no impide que la que ha ejercido se oponga a la acción reivindicatoria, ya que esa disposición no es obligatoria y en el caso de cumplirse solo tiene por efecto que el que ejerce la posesión apta para usucapir, queda protegido contra la posesión que pudiera arrogarse un tercero.

SEXTO.- Es infundado el tercer concepto de violación. También se en cuenta que la autoridad responsable resolvió en términos de confirmar la sentencia de primer grado, resultaba pertinente que condenara en costas al apelante, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles.

De lo anterior se concluye que la sentencia reclamada no es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, por no infringir las disposiciones de la Ley secundaria invocadas, y debe negarse el amparo.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103-I y 107-I, II, III y V de la Constitución General, 45, 158 y 190 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y 26-III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rómulo Hernández Martínez, contra los actos





76

que reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y del Juez Mixto de Primera Instancia de Papantla, Ver., consistientes, respectivamente, en la sentencia definitiva de fecha once de septiembre de mil novecientos sesenta y uno, dictada en el tope de la apelación del juicio civil, seguida por el quejoso a Guadalupe Xchiguita; y en su ejecución.

Notifíquese; publíquese; con testimonio de esta resolución devuélvase los autos a la autoridad responsable, y, en su oportunidad archívese el expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos, habiendo sido relator el C. Ministro Ramírez Vázquez.

Firman los CC. Presidente y Ministros que integraron la Sala, con el Secretario que autoriza y da fe.

El Presidente de la Sala.

Lic. Mariano Ramírez Vázquez.

Los Ministros:

Mario G. Rebolledo.

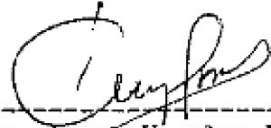
Lic. José Castro Estrada.

Lic. Rafael Rojas Villagas.

El -----

D. 8186/961/2a  
ROMULO HERNANDEZ MARTINEZ.

Secretario de Acuerdos de la Sala.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Angel Morales Moreno.

"En **27 SET 1963** por lista de la misma  
fecha, se notificó la resolución anterior a los intere-  
sados y al Ministerio Público Federal,

